

AMNISTÍA INTERNACIONAL - DECLARACIÓN PÚBLICA

20 de Septiembre de 2018

AMR 46/9132/2018

PERÚ: AUTORIDADES PONEN FIN A LA CRIMINALIZACIÓN DE 16 PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Tras cinco años de un proceso judicial infundado en contra de 16 personas defensoras del medio ambiente y el territorio, las autoridades judiciales han puesto punto final a su criminalización. Amnistía Internacional celebra que estas 16 personas, que hacen campaña por los derechos al medio ambiente sano y al territorio en el contexto del proyecto minero Conga, en la región de Cajamarca, puedan continuar con su trabajo de defensa de los derechos humanos sin miedo a sufrir represalias únicamente por levantar su voz.

El 19 de septiembre de 2018, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca confirmó la decisión absolutoria en favor de las 16 personas defensoras de derechos humanos emitida por el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Cajamarca el 28 de marzo de 2017. La decisión de primera instancia llamó la atención del Ministerio Público, al considerar que no había cumplido con su función de aportar pruebas que sustentaran las acusaciones de secuestro agravado, y en forma subsidiaria, de coacción, en contra de las 16 personas defensoras, así como el cargo por ultraje a símbolos de la patria en contra de una de ellas.

Tras acceder a algunos de los audios de las audiencias dentro del debate oral y público de primera instancia, Amnistía Internacional no pudo encontrar prueba alguna presentada por la Fiscalía que vinculara a las personas defensoras de derechos humanos con los cargos presentados en su contra. La fiscalía únicamente presentó testimonios de los funcionarios públicos que denunciaron a las personas defensoras y de otras personas que entraron en contradicciones, así como de personal policiaco que admitió que no constató directamente la información presentada e incluso señaló que su fuente de información eran “infiltrados” en la manifestación en que supuestamente las personas defensoras habrían cometido los delitos por los que fueron absueltas.

Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre el uso indebido del sistema de justicia penal para acallar a estas 16 personas defensoras de derechos humanos y disuadirlas de continuar con la defensa de derechos. Asimismo, Amnistía Internacional ha identificado este caso como parte de un patrón común en Perú en donde las autoridades recurren al uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente, el territorio y de aquellos ligados al acceso a la tierra.

Por ello, no basta con poner punto final a uno de los múltiples casos de criminalización de personas defensoras en el país. Es fundamental que las autoridades peruanas tomen medidas idóneas y concretas para evitar que el sistema de justicia continué siendo usado indebidamente para hostigar el legítimo y valioso trabajo de quienes defienden derechos humanos.

Por lo tanto, la organización reitera su llamado a las autoridades de investigación y procuración de justicia a que:

- cierren los procesos penales infundados en contra de personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente, el territorio y de aquellos ligados al acceso a la tierra, o soliciten a los jueces respectivos su cierre en aquellos casos en que no exista fundamento alguno para sostener los cargos.
- inicien los procesos administrativos, disciplinarios o penales, según corresponda, contra las y los funcionarios que han hecho uso indebido del sistema de justicia para intimidar y desacreditar a las defensoras y los defensores de derechos humanos mediante procesos penales infundados.
- Se abstengan de usar indebidamente el sistema de justicia para hostigar y desacreditar a las personas que defienden los derechos humanos al medio ambiente, al territorio y a aquellos ligados con el acceso a la tierra.